

Lidiando con la ambición: la política exterior y de seguridad de España al inicio del nuevo milenio

Richard Gillespie
Catedrático de Ciencia Política,
Universidad de Liverpool

El año 2001 ha confirmado determinadas tendencias que ya se habían manifestado al inicio del segundo Gobierno presidido por José María Aznar. En este sentido, la característica más destacada no ha sido la innovación, sino la continuidad de planes ya existentes diseñados para adquirir mayor protagonismo en el mundo y para dar mayor énfasis a los aspectos económicos de las relaciones exteriores (Sánchez Mateos, 2001). Al no acompañarse de un incremento de los recursos correspondientes, era evidente que esta pretensión de desarrollar una agenda más ambiciosa en el ámbito de la política exterior y de seguridad, pondría a los responsables políticos españoles ante algunas decisiones muy difíciles. De hecho, el Gobierno se enfrentó, en mayor medida que nunca, a situaciones en las que diferentes objetivos políticos sencillamente no podían conciliarse, y por lo tanto, al final, algunos objetivos quedaron inevitablemente subordinados ante la primacía de otros. Por supuesto, la priorización no es ajena a la política exterior y suele ser la única solución posible cuando los recursos no son suficientes. Sin embargo, en el caso de España, los dilemas se intensificaron debido a la ambición internacional de los gobernantes del país. Bajo el peso de los éxitos alcanzados por toda una serie de gobiernos españoles desde los años ochenta, la actual administración de Aznar ha optado por enfrentarse al complejo desafío de intentar sacar a España de las filas de las "potencias medianas" para que entrara en el club de élite de los "principales actores" europeos.¹

Tras haber actuado de forma muy eficaz en los últimos años como "potencia mediana" en el ámbito de las relaciones internacionales, España se ha dado cuenta de que avanzar en ese sentido no es simplemente cuestión de dar pasos mayores, sino de dar un salto cualitativo, y además, un salto que podría *poner en peligro* algunos de los elementos que han sido cruciales para su éxito como "potencia media". En particular, en el 2001 el país se enfrentó a la perspectiva de perder la sustancial ayuda europea que ha acompañado la modernización del país desde su incorporación a la Comunidad Europea en 1986. Por otra parte, mientras España se esforzaba por ampliar su influencia global ante Washington y dentro de Europa, algunos indicios denotaban un deterioro de las "relaciones especiales" que habían permitido a España desempeñar un papel destacado en el seno de la UE en el pasado, a pesar de situarse por detrás de los "grandes" países europeos en términos económicos.

Por lo general, para que un país que no es una superpotencia pueda acceder a la liga de los grandes, se espera que demuestre cierto interés por objetivos supranacionales y que esté dispuesto a financiarlos, incluso si no coinciden siempre con sus intereses nacionales más inmediatos. Por lo tanto, nuestro análisis de la política exterior y de seguridad de España en 2001 se centrará esencialmente en las tensiones entre los esfuerzos simultáneos destinados a reforzar el papel europeo del país y asumir un papel más relevante en los planes de seguridad internacional de Washington, por una parte, y las acciones destinadas a salvaguardar intereses nacionales a más corto plazo, por otro lado. Intentaremos asimismo ilustrar la

hipótesis de que un Estado que aspira a desempeñar un papel internacional reforzado tenderá a revisar las relaciones especiales de naturaleza más tradicional, y puede correr el riesgo de ponerlas en peligro, al buscar nuevas alianzas internacionales con socios más poderosos. En 2001 algunos indicios (aunque contradictorios) parecían señalar que esto podría estar ocurriendo al desatenderse las relaciones con América Latina, mientras que en el Mediterráneo el papel de España como actor regional se veía amenazado por las desavenencias con el interlocutor clave de Madrid y por el fracaso de los esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio.

Siguiendo esta línea argumental, el estudio partirá de una visión global de las relaciones con los socios estratégicos dentro de la UE, marcadas por un humillante revés a España en la batalla con Alemania en relación con las futuras prioridades de financiación de la UE, a la luz de la ampliación hacia los países del Este. A continuación, ampliaremos el enfoque con el fin de considerar un posible incremento de las tensiones entre atlantismo y europeísmo, avivadas por la llegada a la Casa Blanca de

“En Laeken, España se resistía a la idea de que la futura Convención Europea debatiera la división de competencias entre gobiernos y regiones”

un nuevo presidente con una marcada tendencia a dividir el mundo entre amigos y enemigos, y cuyas políticas conservadoras empezaron a encontrar algún eco en Europa cuando varios países (Italia, Dinamarca, Portugal) experimentaron cambios de equilibrio electoral hacia la derecha. El tercer foco de atención de este estudio será el progresivo deterioro de las relaciones hispano-marroquíes, al tratarse de un aspecto de crucial importancia en el contexto de la política mediterránea y, sin duda alguna, una preocupación mucho más constante para los diplomáticos españoles que los acontecimientos en Asia y en América Latina –al menos hasta que la crisis argentina tocó de lleno a España en diciembre–. Este proceder debería permitirnos abordar la mayor parte de las cuestiones que han sido determinantes para la política exterior y de seguridad de España en 2001. Recogerá, por supuesto, la reacción española tras los acontecimientos del 11 de septiembre y sus consecuencias, incluyendo las diversas respuestas de la administración Aznar a escala bilateral y multilateral. A raíz de los atentados terroristas contra Estados Unidos, España consiguió uno de sus objetivos más anhelados: desarrollar nuevas formas de cooperación antiterrorista que, de repente, resultaban mucho más aceptables para todos los interlocutores claves del país. Finalmente, se prestará una

especial atención a otro supuesto éxito del año, reconociendo su carácter singular: nos referimos a los indicios de un desenlace decisivo en el tradicional litigio con el Reino Unido sobre Gibraltar. Este es uno de los ejemplos en los que la defensa persistente de un interés nacional puede haber empezado a dar dividendos... después de que, durante décadas, pareciera una postura improductiva o incluso contra-productiva. Los intereses nacionales también han pesado en otros ámbitos de la política exterior y de seguridad, pero en esos casos ha resultado mucho más difícil para el Partido Popular (PP) conciliar los intereses supranacionales, internacionales y subestatales. De hecho, a lo largo de 2001 generaron tensiones tanto con otros estados como con actores subestatales dentro de España.

¿Más Europa?

En 2001 la política del Gobierno de España sobre el futuro de Europa se clarificó, a pesar de que Aznar no llegara a introducir en la agenda del debate ningún proyecto de gran calado. En su intervención en un seminario celebrado en Berlín en enero defendió la identidad nacional de los estados europeos, a la vez que abogaba por una Comisión fuerte como parte de un "tronco común europeo" (*El País*, 20.01.01). Apoyando la ampliación hacia el Este, declaró que España estaba "dispuesta a compartir nuevas responsabilidades" (ibid.) pero no consiguió justificar esta voluntad. Lo que permanecía inalterable era la firme oposición de España a la idea de una simple transferencia de fondos de la UE de Europa Meridional a Europa Oriental tras la próxima ampliación, como ocurriría en caso de mantenerse la actual fórmula para la distribución de fondos estructurales. Madrid deseaba postergar el sistema de toma de decisiones por mayoría cualificada todo lo posible para las decisiones que afectan a la distribución de fondos. El mensaje constante, expresado por Aznar durante una visita a las capitales de la Europa del Este a principios de diciembre, era que "las regiones españolas no van a ser más ricas por el hecho de que otros países más pobres entren en la UE" (*El País*, 05.12.01). El hecho de que esto se convirtiera en una prueba de fuerza entre España y Alemania se debió en parte a la falta de claridad respecto a lo que el Consejo de Niza, celebrado en diciembre de 2000, había decidido en cuanto a cuestiones financieras, y en parte también al deseo de Madrid de asegurar algún tipo de compromiso por parte de la UE sobre la cuestión de los fondos en ese momento, de forma que España pudiera evitar dar una imagen egoísta durante su presidencia de la

Unión. En las semanas siguientes a la cumbre de Niza, España envió a los otros estados miembros una declaración en la que exponía su interpretación de lo que los líderes europeos habían acordado: que el paquete de fondos de cohesión, que debía ser aprobado por unanimidad para cubrir el período a partir de 2007, tendría una duración de siete años. Mediante una contradecación, Alemania replicó que todavía no se había acordado qué duración tendría el paquete. Con Grecia y Portugal apoyando la declaración de Madrid, y Holanda, Austria y Dinamarca respaldando la contradecación, Aznar apostó por presionar para resolver la disputa. Tal vez animado por la respuesta favorable que Madrid había recibido por parte de la Comisión, es posible que haya calculado, primero, que Francia e Italia acabarían apoyando a España (Francia, a cambio del futuro apoyo de España cuando se abordara en la agenda de la UE la reforma de la Política Agrícola Común, e Italia, por sus intereses directos en las ayudas regionales), y, en segundo lugar, que Alemania accedería a cambio del apoyo de Europa Meridional al objetivo de Berlín de establecer un período de transición largo, a partir de la ampliación, antes de que los inmigrantes procedentes de los nuevos estados miembros disfrutaran del derecho a viajar libremente a Europa Occidental. Sin embargo, Francia, que seguía intentando reconstruir el eje franco-alemán como medio para mantener su tradicional papel protagonista en la UE, terminó por alinearse con Alemania, mientras que otros interlocutores (incluida la Comisión, Bélgica y Suecia) pusieron fuertes objeciones a lo que consideraban como esfuerzos por parte de España por vincular dos cuestiones que nada tenían que ver. La batalla, que se prolongó durante la mayor parte del mes de abril y mayo, terminó con una retirada de España cuando se materializó el apoyo de Francia a Alemania. El altercado resultó incómodo para España durante la visita de los reyes a Polonia a mediados de mayo, ya que estaba afectando a las negociaciones de integración y, por lo tanto, restaba credibilidad a las declaraciones de España apoyando la ampliación hacia el Este (un objetivo de la visita real, junto con la promoción comercial).

Este episodio puso de manifiesto el relativo aislamiento de España dentro de la UE en cuanto a una cuestión fundamental de financiación, dándole a la oposición socialista una base para declarar que "España está más aislada que nunca en Europa" (*El País*, 27.06.01). Al margen de la armonía existente con el Reino Unido y con Portugal (pero, por el contrario, no con Alemania y Francia) en cuanto a las presiones para la liberalización de las estructuras económicas europeas (con lo que Madrid pretendía atraer más inversiones hacia España), el apoyo a la

postura de Aznar se limitaba exclusivamente a los beneficiarios de los fondos estructurales y de cohesión del Sur de Europa. El otro único gran aliado de España era Italia, tras la elección triunfal de Berlusconi a mediados de mayo. Aunque el asunto no terminó ahí, y la discusión sobre la distribución de los fondos de cohesión se retomará con toda probabilidad en el futuro, se trató de un revés muy notorio para España y supuso un desprestigio para este país tanto ante Europa Occidental como ante los países de Europa Oriental. Aznar expresó abiertamente su descontento en la cumbre de la UE sobre la ampliación, celebrada en Gotemburgo a mediados de junio, cuando, a pesar de que España dio marcha atrás, ni Francia ni Alemania se mostraron dispuestas a fijar en 2002 el plazo para finalizar las negociaciones de la ampliación. La falta de empatía personal de Aznar con Schröder era evidente, pero se trataba de un tema que trascendía las relaciones personales, como quedó de manifiesto en la dura crítica al objetivo de España por parte del partido hermano del PP en Alemania, la Unión Demócrata Cristiana (CDU). A principios de diciembre, con una gira por Varsovia, Praga, Bratislava y Bucarest, Aznar intentó reparar parte del daño, subrayando ante sus anfitriones que no se permitiría que la cuestión de las ayudas de la UE a España retrasara la consumación de las negociaciones para la incorporación de los nuevos países (para lo que los recursos de la Comunidad estaban totalmente adecuados, teniendo en cuenta que el actual presupuesto había asumido la ampliación en 2002). De hecho, les garantizó que las negociaciones para la incorporación constituirían una de las principales prioridades de la futura presidencia española de la UE.

Hacia finales de año Aznar clarificó la postura de su Gobierno respecto a determinados aspectos de la futura construcción europea. En octubre, expresó su apoyo a "más Europa" en determinados ámbitos, incluyendo el desarrollo de la Política Europea Común de Seguridad y Defensa (PECSO). Al mismo tiempo, al defender que las actuales competencias de la UE quedarán plasmadas en una constitución escrita y que cualquier avance posterior fuera aprobado por todos los parlamentos nacionales de los estados miembros, de hecho situaba a España claramente en el bando de los "intergubernamentalistas".

La prueba de que un mayor intergubernamentalismo dentro de la UE no salvaguardaría forzosamente los intereses de España, en especial después de la ampliación de 15 a 27, quedó patente con la decisión de los dirigentes del Reino Unido, Alemania y Francia de reunirse por separado la víspera de la reunión del Consejo Europeo de Gante el 19 de

octubre, con el fin de coordinar la respuesta europea ante la intervención de Estados Unidos en Afganistán. Dos semanas después, Aznar participó en la frenética presión por parte de los países medianos de la UE que consiguió garantizar que la lista de invitados a una posterior cumbre informal, en esa ocasión en Downing Street, se ampliaría de los tres países previstos a siete estados miembros, incluido España. Por supuesto, estas reuniones estaban relacionadas con la gestión de crisis y no con la práctica normal de toma de decisiones en la UE, pero no obstante sentaban posibles precedentes para el futuro (Barbé, 2001b). Hacia finales de 2001, a pesar de la proclamación de una nueva relación con Italia, lanzada con motivo de una reunión entre Aznar y Berlusconi en Granada, en el mes de noviembre, parecía claro que España seguiría necesitando toda una compleja serie de alianzas en el escenario europeo. En efecto, el alcance de la política de cooperación reforzada con Italia se limitaba en gran medida, al menos de forma inmediata, al ámbito de la lucha contra el terrorismo; además de ello, los dos países acordaron presionar para incorporarse al grupo de los grandes países dentro de la UE. Por

“Las relaciones con Marruecos fueron el único problema que Aznar reconoció en el debate parlamentario del Estado de la Nación del 26 de junio”

otra parte, antes de que finalizara el año la utilidad de Italia como aliado dentro del marco europeo se puso en cuestión, debido a las abiertas manifestaciones de hostilidad hacia la UE expresadas por los miembros del ala derecha del gabinete de Berlusconi.

La elección de Aznar a la presidencia de la recientemente rebautizada Internacional Democristiana de Centro, en México el 21 de noviembre, auguraba sólo modestos avances en términos del establecimiento de alianzas. Este hecho quedó subrayado durante ese mismo mes por una carta de la CDU al presidente del Gobierno español, en la que se exponía la necesidad de que el apoyo estructural de la UE a España, por valor de 42.900 millones de euros entre 2000 y 2006, debería acabarse en 2006. La gran satisfacción para España en el contexto de la UE fue ver cómo, a raíz de los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos, otros estados miembros se sumaban a la agenda española en el ámbito de Justicia e Interior. El tipo de acuerdos que Madrid había estado negociando con esfuerzo, consiguiendo avances fundamentalmente a escala bilateral (con Italia, Francia y Portugal), recibieron de repente apoyo a escala multilateral en la cumbre de Laeken celebrada los días 14 y 15 de diciembre, a pesar de que determinadas complicaciones legales y técnicas

retrasarían la aplicación práctica de la *euroorden* y otras medidas específicamente antiterroristas. El nuevo compromiso de los estados de colaborar en la lucha contra el terrorismo, junto con las detenciones de miembros de ETA dentro de España, reforzará todavía más la convicción del PP de que la solución policial al problema vasco, además de la dispensa constitucional existente, es posible. Sin embargo, la crítica implícita por parte de algunos otros países europeos quedó patente en el rechazo de algunos miembros de la UE a incluir a Batasuna en la lista acordada de organizaciones terroristas, como era el deseo de Aznar.

En Laeken, donde España tenía mucho que celebrar, Aznar seguía aislado en una cuestión: se resistía a la idea de que la futura Convención Europea debiera la división de competencias entre los gobiernos y las regiones de los estados miembros, y bloqueó la condición de que las "regiones con poderes legislativos" participaran en la organización de la misma. Esta postura reflejaba el rechazo del Gobierno a una mayor descentralización dentro de España. Oponiéndose radicalmente a las nuevas demandas de los nacionalistas vascos de tener voz propia en Bruselas, Madrid, con la ayuda de los presidentes regionales del PP, también rechazó las demandas mucho más modestas de que las comunidades autónomas fueran incluidas dentro de las delegaciones españolas en las reuniones del Consejo de Ministros –una posibilidad de la que ya disfrutaban Alemania, Bélgica y el Reino Unido–. Los analistas críticos consideraron absolutamente anómalo que España adoptara una postura tan centralista en Laeken, teniendo en cuenta su naturaleza claramente descentralizada. La explicación debe buscarse en la política interna, donde Aznar está decidido a luchar por la estabilidad constitucional mediante la inflexibilidad, en especial en su enfrentamiento con los nacionalistas vascos. Pero el precio de esta intransigencia suponía descartar de la ecuación europea un área importante de colaboración potencial con Alemania, que por su parte defiende una estructura más federal de la UE.

"Uno de los aliados más fiables de Estados Unidos"

Una de las razones por las que la Administración Aznar estaba dispuesta, en la circunstancia, a correr el riesgo de un aislamiento temporal dentro de Europa se debía a sus florecientes relaciones con Estados Unidos, en especial después de la elección de George Bush como presidente. En enero, durante la etapa final de la Administración Clinton, España aseguró su objetivo de mantener cumbres anuales

con Estados Unidos (a nivel de representantes de Asuntos Exteriores) y demostró su satisfacción inmediatamente, accediendo a la demanda americana formulada en 1998, de ampliar las instalaciones de la base militar de Rota (Cádiz). Los nuevos planes incluían la construcción de 16 hangares para aviones *Galaxy* de transporte estratégico y la ampliación de las instalaciones para combustible y dársenas. Una vez completada la ampliación de Rota, España podrá proporcionar una *cabeza de puente* estratégica para la superpotencia americana en caso de intervenciones militares en Oriente Medio, e incluso más lejos. Tal vez en mayor medida todavía que en el pasado, la relación militar con Estados Unidos resultará difícil de conciliar con la visión de España como líder en la construcción de la Asociación Euromediterránea.

La creciente importancia de la alineación atlántica se puso de manifiesto en junio, cuando España fue elegida como primera escala de la primera visita del presidente Bush a Europa (la primera vez que un presidente de Estados Unidos ha concedido a España este privilegio). Enseguida quedó claro el porqué de este honor, cuando Aznar aprovechó la oportunidad para desmarcarse de sus socios de la UE al expresar su apoyo a la nueva "estrategia de seguridad total" de Washington contra un ataque con misiles,³ en una declaración conjunta, aunque en la misma también se apoyaba el proyecto europeo de establecer una Fuerza de Reacción Rápida (evitando de esta forma un cisma Estados Unidos-UE). Al ver que, de una u otra forma, el proyecto de Estados Unidos iba a salir adelante con toda seguridad, la Administración Aznar deseaba reservarse un papel en el mismo. Enseguida se supo que a finales de mayo, antes de que se iniciara la gira europea de Bush, personal diplomático y de Defensa de España habían visitado el Pentágono y habían sugerido que la participación de España en el proyecto de defensa antimisiles podría concretarse con el estacionamiento frente a las costas de Libia de una de las nuevas fragatas F-100 –que la Armada espera tener en 2002–, para interceptar misiles lanzados desde ese país (*El País*, 21.06.01). Este escenario, que tenía cierta credibilidad entre los círculos conservadores de Estados Unidos, parecía revivir el viejo discurso de la "amenaza del Sur" que había caracterizado tradicionalmente el enfoque de defensa de España. E iba en contra del espíritu de esfuerzos diplomáticos más recientes de involucrar a Libia en el Proceso de Barcelona, como se había pretendido con la visita de Josep Piqué a Trípoli en octubre.

Después del 11 de septiembre la preponderancia de los temas de seguridad y defensa en las relaciones hispano-norteamericanas (Sahagún, 2001) se reforzó

cuando España, junto con otros estados de la UE, actuaron de acuerdo con Estados Unidos en relación con el derrocamiento del régimen talibán en Afganistán y la lucha internacional contra la red Al Qaeda. De hecho, las fuerzas de seguridad españolas mostraron estar alertas ya el 22 de junio, cuando Mohamed Bensakria, supuesto líder de un grupo terrorista islámico fundado por Osama Bin Laden, fue arrestado en el país, y cuando se realizaron más detenciones de militantes islámicos en septiembre y noviembre (sumando un total de 18 a lo largo del año). España pudo comprobar su importancia relativa para Estados Unidos cuando se iniciaron las hostilidades en Afganistán a principios de octubre y Aznar no fue avisado personalmente por Bush, sino por su segundo Dick Cheney (como en el caso de los líderes de Turquía y de Grecia). Aun así, el apoyo de España a las acciones militares de las fuerzas de Estados Unidos y del Reino Unido fue inmediato e "incondicional". Tanto el PP como el PSOE manifestaron su disposición a que tropas españolas participaran en la campaña, aunque los socialistas instaron al Gobierno a consultar al Parlamento antes de hacerlo y a equilibrar la contribución militar aportando también ayuda humanitaria extraordinaria. Como Estados Unidos no deseaba verse limitado por tener que operar a través de una fuerza genuinamente multinacional, al final España desempeñaría un papel relativamente discreto en las operaciones, apoyando las acciones militares desde lejos en el contexto de la OTAN y, después, desempeñando un papel de apoyo logístico en la posterior Fuerza Internacional de Asistencia y Seguridad organizada por el Reino Unido y desplegada en Afganistán. Mientras que los estrategas españoles (pero claramente *no* la opinión pública española)⁴ se sintieron defraudados porque no se les hubiera brindado la oportunidad de desempeñar un papel tan importante como el que estaban dispuestos a asumir, las autoridades de Estados Unidos reconocieron como una contribución real la detención de militantes islámicos dentro de España. Aunque España se mantuvo firme en la política de la UE de no extraditar sospechosos a los Estados Unidos sin garantías contra la aplicación de la pena de muerte, el reconocimiento americano hacia el papel de España quedó patente cuando el presidente Bush recibió al presidente del Gobierno español en la Casa Blanca el 28 de noviembre. A partir de ese momento, España pretendía desempeñar un papel constructivo durante su futura presidencia europea, negociando un acuerdo global de extradición entre la UE y Estados Unidos, que permitiera salvaguardar las preocupaciones europeas en cuanto a los derechos humanos. Esta es una cuestión en la que la Administración del PP sí ha

defendido una postura ética cuando, por lo general, su política exterior y de seguridad han dado poca prioridad a los derechos humanos.⁵

El problema de Marruecos

En el contexto regional, la causa de preocupación más profunda en el ámbito del Mediterráneo era el evidente deterioro de las relaciones de España con Marruecos, que frustró las esperanzas de una cooperación más eficaz en el control de la inmigración procedente del Sur. Las relaciones con Marruecos fueron el único problema que Aznar reconoció en el debate parlamentario del Estado de la Nación del 26 de junio. Las relaciones con el vecino del sur dejaban en segundo plano las relaciones con otros países del norte de África, teniendo en cuenta que el problema de la inmigración había pasado a situarse entre las prioridades de la agenda política española. Si no existiera ningún tipo de cooperación bilateral práctica con Marruecos en éste u otros ámbitos, la nueva agenda de Justicia e Interior de la UE no podría nunca servir adecuadamente a los objetivos de

“En su conjunto, 2001 fue un año estéril, y en algunos aspectos negativo, para las especiales relaciones de España con el Mundo Árabe y con América Latina”

España, en lo que se refiere al desafío planteado por la inmigración (Gillespie, 2001). Las relaciones, que ya estaban deterioradas como resultado de las dificultades en las negociaciones del acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, se deterioraron todavía más cuando este último país se retiró de las mismas el 26 de marzo, y los ministros europeos de Pesca las dieron formalmente por finalizadas un mes después. Amplios sectores interpretaron la advertencia de Aznar, el 17 de mayo, de que este desenlace tendría "consecuencias" en las relaciones hispano-marroquíes y en las relaciones UE-Marruecos, como un indicio de que España no utilizaría su futura presidencia de la UE para buscar una mayor generosidad europea en el contexto de la revisión del acuerdo de asociación UE-Marruecos.⁶ Aunque el ministro de Asuntos Exteriores Piqué hizo declaraciones más conciliatorias, Marruecos interpretó la respuesta del presidente del Gobierno como una clara amenaza. A raíz de este hecho, Mohamed VI tomó personalmente el control de las relaciones con España, y se apresuró a enviar a Madrid a dos de los ministros designados por la Casa Real, Mohamed Benaissa y Ahmed Midoui, para frenar las posibles represalias. El deterioro de las relaciones hacía peligrar para España un acuerdo de inmigración, negociado desde hacía tiempo, en el que Madrid

había querido incluir un elemento de vigilancia policial, pero que, una vez firmado el 25 de julio, resultó ser un acuerdo mucho más limitado sobre migración laboral que no haría nada por aliviar las preocupaciones españolas respecto a la llegada de un número sin precedentes de inmigrantes irregulares durante los meses de verano.

En julio, Aznar volvió a manifestar su disgusto con Marruecos rechazando fijar una fecha para una cumbre prevista en el tratado de amistad entre los dos países. Las escaramuzas diplomáticas ya se habían abierto en agosto, cuando el ministro español de Asuntos Exteriores intentó convocar al embajador de Marruecos para expresar su impaciencia en cuanto a la supuesta pasividad de Marruecos respecto a las *pateras*.⁷ Como no tenían ganas de que les dieran un tirón de orejas, los marroquíes se limitaron a enviar al subordinado del embajador. A pesar de posteriores esfuerzos esporádicos, a nivel ministerial, para restablecer las deterioradas relaciones, el tono de una entrevista con Mohamed VI publicada por *Le Figaro* el 4 de septiembre dejaba traslucir que se sentía defraudado con España y prefería a Francia como aliado dentro de la UE. Aun así, la decisión de Marruecos, el 27 de octubre, de llamar a consultas a su embajador Abdesalam Baraka, mencionando "determinadas actitudes y posiciones españolas a propósito de Marruecos" (*La Vanguardia*, 29.10.01), sorprendió desagradablemente a los representantes españoles, que no alcanzaban a comprender las razones por las que Marruecos había llevado las cosas tan lejos.

Aunque varios factores contribuyeron al deterioro de las relaciones, el movimiento de Marruecos era claramente estratégico, y pretendía presionar a España para que hiciera alguna concesión. Pasaron dos semanas antes de que se diera finalmente una explicación plausible, basada fundamentalmente en que, en octubre, España había bloqueado una iniciativa francesa para que la UE apoyara el nuevo Plan Baker para el Sáhara Occidental. El plan, que Baker había intentado vender sin éxito al Polisario ya en mayo, contemplaba el futuro del territorio como una parte integral de Marruecos, con un considerable grado de autonomía, abandonando el tradicional objetivo de Naciones Unidas de organizar un referéndum sobre la autodeterminación, sin tener en cuenta las protestas del Polisario (*El País*, 11.11.01). Teniendo en cuenta que, debido a la eficacia de las tácticas dilatorias de Rabat para frustrarlo, muchos países europeos para entonces ya consideraban la opción del referéndum como inviable, que Argelia estaba absorbida por su conflicto interno, y que Marruecos se sentía en general reforzado por el desenlace de los acontecimientos desde el 11 de sep-

tiembre, Rabat vio una oportunidad de oro para imponer su fórmula preferida. Las concesiones de explotación petrolífera a empresas francesas y americanas en octubre pueden haber vuelto a despertar viejas simpatías hacia el bando marroquí en el conflicto. Sin lugar a dudas, los acontecimientos coincidieron con un resurgimiento del interés por las explotaciones de petróleo frente a la costa atlántica del norte de África (*Financial Times*, 14.11.01).

Cabría preguntarse entonces por qué los representantes de España, sin llegar a bloquear el nuevo Plan Baker, intentaban mantener abierta la opción del referéndum como alternativa. Se puede especular que no se debía a ninguna deferencia hacia la extendida pero pasiva simpatía por la causa saharauí dentro de España, sino porque Madrid no estaba dispuesto a vender su apoyo a bajo precio y estaba reservándose una baza para obtener *contrapartidas* en términos de cooperación marroquí en la lucha contra el tráfico de inmigrantes y de hachís hacia España, o para obtener, a su vez, concesiones energéticas. Al fin y al cabo, teniendo en cuenta que el PSOE había decidido finalmente en noviembre instar a su tradicional aliado Polisario a negociar sobre la base del último Plan Baker, sería de extrañar que este tipo de *realpolitik* no hubiera calado también en el PP. De hecho, una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores Piqué (*La Vanguardia*, 21.11.01) revelaba que una solución negociada basada en el Plan Baker era tan aceptable para el Gobierno como para el primer partido de la oposición.

Mientras el Gobierno Aznar mantenía oficialmente abierta la opción de la posición tradicional de España en el conflicto, surgió una ruptura fundamental en el acuerdo bipartito sobre política exterior que los dos principales partidos habían respetado en los últimos años. Se trataba de algo más serio que las desavenencias ocasionales que habían surgido en el pasado (por ejemplo, en relación con Cuba), o que las diferencias de perspectiva sobre el futuro de Europa que no tenían consecuencias inmediatas. Ahora la divergencia entre el PP y el PSOE pasaba de las posiciones formales a la práctica. Después de retrasar la visita durante varios meses, el líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero finalmente viajó a Marruecos en diciembre como invitado de la USFP (Unión Socialista de Fuerzas Populares de Marruecos) del primer ministro Abderramán Yussufi, a pesar de las explícitas objeciones del Gobierno español sobre la "diplomacia paralela". Aznar consideró que la visita de Rodríguez Zapatero era "más que insólita". Mientras que algunos ejercicios anteriores de paradiplomacia por parte del PSOE, como las visitas de González a Argelia durante los años de Suárez, podían haber apoyado la causa del

Polisario (Gillespie, 2000), la visita de Zapatero a Marruecos, además de pretender mostrar su capacidad para asumir la presidencia, hizo gala de mucho más pragmatismo a la hora de tratar con las autoridades marroquíes que la que demostraban el PP y el Gobierno de Aznar. La recompensa consistió en una entrevista privada de 40 minutos con Mohamed VI, un privilegio que hizo que Aznar se negara a recibir a Zapatero a su regreso a España.

La relación que se había establecido con Marruecos durante los gobiernos encabezados por González (que todavía mantenía excelentes relaciones personales con los dignatarios marroquíes) seguía pesando en el ámbito económico, siendo España el tercer inversor extranjero y el segundo socio comercial de Marruecos. Sin embargo, a finales de año, la fractura diplomática surgida del enfrentamiento bilateral empezaba a afectar a los proyectos de cooperación, y las difíciles relaciones entre los dirigentes de los dos países amenazaban con agravar los conflictos geopolíticos. España seguía estando interesada en el potencial de explotación de las aguas frente a la costa del Sáhara Occidental y tenía también preocupaciones más defensivas en sus relaciones con Marruecos. Si las cuestiones relacionadas con la inmigración eran mucho más apremiantes a nivel cotidiano, los temas territoriales continuaban latentes. Aunque Marruecos se abstenía de plantear la cuestión de Ceuta y Melilla, las islas Canarias amenazaban con volver a situarse en la agenda diplomática tras una ausencia de veinte años, debido al resurgimiento hacia finales de año de la cuestión de los recursos marítimos. La autorización a Repsol YPF por parte de Madrid para iniciar prospecciones petrolíferas frente a las costas orientales de Fuerteventura y de Lanzarote provocó una fuerte reacción de Marruecos por tratarse de aguas sobre las que los dos países no habían acordado ninguna delimitación (en una zona fuera de las aguas territoriales españolas pero situada dentro de una zona económica que España asume como propia en base a una línea equidistante entre el territorio español y el marroquí). La decisión de España provocó una protesta diplomática el 27 de diciembre y el ministro marroquí de Comunicaciones, Mohamed Achaari, se refirió a las islas Canarias, en términos geopolíticos, como una extensión continental de Marruecos.

El alejamiento (en parte, unilateral) de Marruecos planteaba a España un verdadero problema para conseguir su objetivo de regular la inmigración. De la misma forma, afectaba al potencial de la futura presidencia española a la hora de tomar iniciativas destinadas a revitalizar el Proceso de Barcelona. Sin duda alguna, el servicio diplomático contaba con estas ini-

ciativas, en un momento en el que intentaba sacar lecciones del 11 de septiembre y pensar en cómo podían desarrollarse a través de la Asociación Euromediterránea: haciendo hincapié en el tercer capítulo relativo a asuntos sociales, culturales y humanos, y demostrando una mayor disposición para suavizar las políticas tradicionalmente proteccionistas en el ámbito económico⁸. A finales de año, sin embargo, todavía no quedaba claro si el nuevo enfoque se materializaría con un retorno del protagonismo español dentro del Proceso de Barcelona durante la futura presidencia de la UE, o si los efectos más duraderos del 11 de septiembre llevarían a Madrid a endurecer su postura en cuestiones de Justicia e Interior.

En su conjunto, 2001 fue un año estéril, y en algunos aspectos negativo, para las especiales relaciones de España con el Mundo Árabe y con América Latina, mientras que el Plan Marco Asia Pacífico 2000-2002 avanzó lentamente con la firma de un convenio para establecer la Casa Asia en Barcelona, como consorcio del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, con el objetivo de impulsar las relaciones entre España, Asia y el Pacífico en los ámbitos internacional, económico, empresarial y cultural (Oficina de

Información Diplomática, 2001). La primera cuestión se vio afectada por el agravamiento del conflicto Israel-Palestina, tan intenso que la breve visita de Aznar a Oriente Medio en febrero tuvo poco impacto en el desenlace de los acontecimientos, aunque los esfuerzos españoles sí propiciaron un encuentro entre Arafat y Peres en el Foro Formentor en noviembre. El Gobierno español se sintió gratificado por el hecho de que, a principios de mayo, Bachar al Asad eligió España para su primera visita a Europa, dando un paso hacia el establecimiento de relaciones más intensas en los ámbitos político, comercial y cultural. Este acontecimiento respondía a la política declarada por Madrid de apoyar a países que mostraban signos, aunque fueran limitados, de "liberalización" –otro caso fue la visita a Madrid en marzo de Teodoro Obiang Nguema de Guinea Ecuatorial–. Los que desconfían del concepto de "democratización desde arriba" (entre otros, la oposición guineana) se sintieron defraudados por la política española. De forma más general, el impulso democrático que España fomentaba era, a menudo, en gran medida simbólico y estaba muy condicionado por los objetivos económicos españoles, como en el caso de los viajes de los reyes a Polonia, mencionado anteriormente, y a Perú en noviembre. A

“La cuestión de política exterior que generó una mayor satisfacción a los representantes españoles fue la de Gibraltar”

pesar de las nuevas iniciativas de la UE para América Latina preparadas durante la presidencia española de la UE, esta región no fue prioridad para la diplomacia española durante 2001, al carecer de un Plan Marco como el que se ha adoptado en el caso de la región Asia-Pacífico (Grasa, 2001). Únicamente el colapso financiero y la crisis política en Argentina a finales de año hizo que América Latina volviera a acaparar los titulares, creando de esa forma una gran alarma en los círculos de la banca española y provocando una tardía visita del ministro de Exteriores Piqué. Juntos, los dos grandes bancos, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y Banco Santander Central Hispano (BSCH), tenían al menos 15.000 millones de dólares depositados en Argentina, mientras que otros inversores susceptibles de registrar pérdidas financieras incluían a Telefónica, Endesa y Repsol. En su conjunto, las empresas españolas habían invertido 41.000 millones de dólares en el país durante la década anterior y empleaban a más de 70.000 personas (*El País*, 14.12.01, 28.12.01). Por lo tanto, España tenía todas las razones posibles para estar preocupada por sus inversiones en América Latina y recurrió a la UE para que ayudara a Argentina.

Gibraltar: ¿sacarse la piedra del zapato?

La cuestión de política exterior que generó una mayor satisfacción a los representantes españoles fue la de Gibraltar, que Felipe González describió en una ocasión como "la piedra en el zapato de España" (Gold, 1994). Tras una interrupción de más de tres años, el diálogo entre España y el Reino Unido en torno a este tema se retomó el 26 de julio de 2001, y en el plazo de dos meses había indicios de "movimiento" real, a pesar de que el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, se mostraba reticente a participar en las conversaciones bilaterales entre Londres y Madrid. Un impulso clave en la decisión de relanzar el diálogo, tal y como acordaron Robin Cook y Josep Piqué a principios de año, era encontrar una fórmula para dar luz verde a la normativa de la UE sobre espacio aéreo. Una vez retomados los contactos, se registró enseguida un avance cualitativo en las negociaciones bilaterales. En septiembre, se crearon expectativas cuando el ministro británico para Europa, Peter Hain, empezó a hablar de la posibilidad de "normalizar" la situación de Gibraltar hacia finales de 2002, refiriéndose al statu quo de Gibraltar como insostenible tanto para el desarrollo de las relaciones entre el Reino Unido y España, como para el funcionamiento fluido de la UE. El 20 de ese mes la nueva actitud conciliadora del Reino Unido se puso de manifiesto

cuando Londres aceptó la propuesta de Madrid de excluir a Gibraltar, de momento, de la directiva sobre *cielo único europeo*, desbloqueando de esta forma dicha iniciativa. En noviembre, Hain señaló que su Gobierno estaba firmemente decidido a alcanzar un acuerdo con España al afirmar que el pueblo de Gibraltar debía "avanzar"; se le consultaría y no se quitaría a nadie la ciudadanía británica a la fuerza, pero no se le permitiría vetar ninguna negociación futura, ni los temas de discusión, ni ningún acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y España (*The Guardian*, 10.11.01). Esto suponía un claro alejamiento respecto a las pasadas garantías dadas a los habitantes del Peñón de que no se introduciría ningún cambio en su estatuto sin su consentimiento. Al menos, eso es lo que parecía de momento: en el plazo de dos semanas, su superior, el secretario británico de Asuntos Exteriores Jack Straw sembró cierta confusión respecto a este asunto al declarar el día 20 (*El País*, 21.11.01) que Gibraltar seguiría siendo británico si la población local no daba su consentimiento a la fórmula negociada entre los dos países.

No obstante, la reunión de los ministros de Exteriores del Reino Unido y de España en Barcelona el 20 de noviembre (diez días después de que Blair y Aznar pasaran un fin de semana de trabajo y descanso en la casa de campo del primer ministro británico en Chequers) generó verdadero optimismo respecto al compromiso de una próxima solución. Por una parte, se mostró más premura que en conversaciones anteriores: el objetivo que se pusieron los ministros fue el de llegar a un acuerdo como muy tarde a mediados de 2002. En segundo lugar, en vez de recurrir a la opinión pública en Gibraltar como pretexto para el letargo, la parte británica se mostraba dispuesta a decirle a la población local que los días del Peñón como paraíso fiscal estaban contados y que, en tales circunstancias, su nivel de vida se mantendría más fácilmente mediante un acuerdo con España que normalizaría su situación dentro de la UE. En tercer lugar, la táctica de Caruana de boicotear las conversaciones porque Londres le negaba el derecho de veto había fracasado claramente en su intento por detener el impulso de las nuevas relaciones entre España y el Reino Unido. Con el fin de ejercer alguna influencia en las negociaciones posteriores, Caruana se apresuró a declarar que podría estar dispuesto a participar en futuras conversaciones sobre la base de la fórmula "dos banderas, tres voces".

Este desenlace se debía en mayor medida a un cambio en la política británica. Si bien Madrid estaba encantada de empezar a demostrar los beneficios potenciales del acercamiento a los habitantes del

Peñón, ofreciendo un mayor número de líneas telefónicas, la verdadera concesión la hizo el Reino Unido en la cuestión de la soberanía, con los primeros indicios de que, en un futuro próximo, aceptaría una situación en la que España podría tener algún tipo de "representación y bandera" en el Peñón. La nueva determinación de Londres de resolver el conflicto de Gibraltar debe considerarse desde la perspectiva de dos acontecimientos. En primer lugar, el mayor compromiso del Reino Unido en Europa, bajo el Gobierno de Tony Blair, y la fructífera colaboración que se había establecido entre Londres y Madrid en su defensa conjunta de una agenda de liberalización económica en el seno de la UE. En segundo lugar, el compromiso del Gobierno Blair de modernizar y de reformar o de acabar con los anacronismos; dicho de otro modo, su nueva actitud, más flexible, hacia una de las últimas reliquias del imperio responde a las reformas que ha estado introduciendo en las estructuras del Estado británico (descentralización, reforma de la segunda Cámara del Parlamento, etc.). Tras su reelección en junio, el Gobierno laborista se encontró en una posición reforzada para abordar la cuestión de Gibraltar, y, por otra parte, los cambios del personal de mayor rango del Foreign Office contribuyeron a darle un nuevo impulso a la búsqueda de una solución.

Quedaba mucho por hacer en 2002 para que la población del Peñón aceptara los nuevos aires de cambio. La recompensa para el PP era considerable: indiscutiblemente su primer éxito claro e inequívoco en política exterior, y sin duda alguna un logro susceptible de ser acogido favorablemente de forma más generalizada dentro de España que cualquier otro éxito putativo anterior. Sin embargo, incluso la solución aceptable que parecía vislumbrarse no carecía de complicaciones. Para una Administración que pretendía consolidar de una vez para siempre las relaciones existentes entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, la perspectiva de una autonomía sustancial de Gibraltar, en el marco de algún tipo de sistema de soberanía compartida entre el Reino Unido y España, suponía sin duda alentar demandas de mayor descentralización por parte de las regiones históricas de España y tal vez también en Ceuta y Melilla (cuando todavía no había transcurrido una década desde que se aprobaran finalmente sus estatutos). Además, como dejaban traslucir las acusaciones malintencionadas de Caruana contra España por aplicar un "doble rasero", un cambio en las disposiciones sobre la soberanía de Gibraltar podría incitar a Marruecos a solicitar cambios similares en relación con los territorios españoles en el norte de África. Hacia finales del reinado de Hassán II, España tuvo

la satisfacción de que Marruecos no diera indicios de agitar el tema de Ceuta y Melilla, en un momento en el que Madrid estaba experimentando una profunda frustración en sus negociaciones diplomáticas con Londres sobre Gibraltar. Ahora, cuando se vislumbra una posibilidad real de llegar a un acuerdo sobre Gibraltar, el proceso de negociación será seguido con mucho interés por parte de Rabat, a quien se proporcionarían nuevos argumentos para esgrimir en sus negociaciones con Madrid, e incluso tal vez un nuevo modelo de soberanía compartida con el que presionar en relación con Ceuta y Melilla.

El año 2001 ha sido un año atípico para la política exterior y de seguridad de España, tanto debido a los nuevos desafíos relacionados con el 11 de septiembre, como a la forma en que gran parte de la agenda política se ha visto condicionada por la perspectiva de la presidencia de la UE durante el primer semestre de 2002. No obstante, se han puesto de manifiesto los continuos aprietos de una potencia mediana con ambiciones de lograr una mayor influencia y de convertirse en un "actor principal". El papel secundario de España en el desarrollo de la Política Europea Común de Seguridad y Defensa (PECSO) y la debilidad de la PESC (Política Exterior y de Seguridad Común) ante la intervención militar en Afganistán han puesto de manifiesto todo lo que queda por hacer. Durante este período la experiencia parecía indicar que podría seguir siendo posible, al menos durante un tiempo, equilibrar y conciliar el acercamiento del país a Estados Unidos y sus orientaciones europeas (especialmente en una UE que incluye en la actualidad algunos gobiernos atlantistas). Estados Unidos y la UE alcanzaron hasta cierto punto un compromiso respecto a temas estratégicos fundamentales, a pesar de que crecían las diferencias sobre cómo enfrentarse al conflicto en Oriente Medio. De forma más general, eran las tradicionales relaciones especiales españolas las que más tenían que perder por la proximidad de Madrid con Washington.

Ha sido dentro de la propia Europa donde se han observado las verdaderas tensiones que afectan a la política española, fundamentalmente entre el tipo de comportamiento que sigue siendo necesario para servir a los intereses nacionales inmediatos de España (definidos en gran medida en términos económicos) y el tipo de conducta que podría responder mejor a sus ambiciones y aspiraciones. El dilema estratégico central para el Gobierno Aznar surgió del hecho de que las dos "lógicas" asociadas al estatus de potencia mediana y de actor de primera fila dentro de Europa, a menudo, simplemente no podían conciliarse, ya que trabajar en un sentido suponía ir en contra del otro.

En términos prácticos, entre otras noticias mejores, el problema subyacente era que la batalla de España por mantener en el futuro las ayudas europeas no sólo complicó el desarrollo de relaciones relativamente vírgenes en Europa Central y Oriental, sino que también provocó conflictos con algunos de los países con los que necesita asociarse –en primer lugar y por encima de todo, Alemania– si quiere incorporarse a un club de élite ampliado.

Fuentes básicas

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (<http://www.congreso.es/Publicaciones>)

El Mundo, Madrid

El País, Madrid

La Vanguardia, Barcelona

Ministerio de Asuntos Exteriores (<http://www.mae.es>)

Ministerio de Defensa (<http://www.mde.es>)

Presidencia del Gobierno, (<http://www.la-moncloa.es>)

The Financial Times, Londres

The Guardian, Londres

Notas

1. Sobre la cuestión de qué significan en realidad estas categorías y los retos que se plantean en relación con el paso de una categoría a otra, léase especialmente: Esther Barbé 1996, 2001a.

2. Declaraciones del presidente George W. Bush, recogidas en "El eslabón español" (*El País*, 13.06.01).

3. "Coincidimos en la necesidad de una estrategia de seguridad total que abarque los sistemas disuasorios tanto ofensivos como defensivos", J.M^a Aznar citado en *El País*, 13.06.01.

4. Según el Eurobarómetro, de todos los Estados miembros, con excepción de uno, la opinión pública en España era la que menos apoyaba la política del Gobierno sobre Afganistán (*El País*, 05.12.01).

5. El Informe de Amnistía Internacional sobre el año 2000, publicado en junio de 2001, describe a España como un país en la UE que presta poca atención a los derechos humanos: "pesan más los intereses económicos que los derechos humanos" (*El País*, 07.06.01; Amnistía Internacional, 2001); un ejemplo concreto fue la política hacia Mauritania, donde las violaciones de los derechos humanos se ignoraron debido al reforzado interés español por sus bancos de pesca como resultado de la pérdida de derechos para pescar en aguas marroquíes (Andrés Ortega, "¡Vista al Sur!", *El País*, 25.06.01).

6. El hecho de que representantes de alto nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores estaban considerando seriamente hacer concesiones a las exportaciones marroquíes de productos agrícolas en el contexto de la Asociación Euromediterránea puede comprobarse en: Miquel Nadal, "¿Mare Nostrum?" (*El País*, 26.07.01).

7. Una palabra clave en este caso es sostenibilidad. Con 567 inmigrantes irregulares interceptados durante un único fin de semana en agosto, la descripción que hace Piqué de la situación como "insostenible" es comprensible. Para las autoridades españolas, la capacidad de Marruecos de intervenir más para regular el movimiento de personas a través de las fronteras quedó patente con la brusca reducción del número de *pateras* que llegaban a raíz del 11 de septiembre (a pesar de que el número de *sin papeles* que llegaban a las islas Canarias aumentó considerablemente). Sin embargo, otra cuestión es que Marruecos pueda ejercer un control mayor sobre el tráfico de personas y de hachís de forma *sostenida* sin el incremento de ayuda que Rabat pretendía obtener por parte de España y de la UE: véase *El País*, 21.08.01 y *El Mundo*, 26.07.01, citando la entrevista de Mohamed VI con *Asharq Al-Awsat* de Londres.

8. En julio, Piqué había estado dando prioridad a los aspectos económicos y financieros de la Asociación Euromediterránea, destacando los planes de España para revitalizar el Proceso de Barcelona durante la presidencia española de la UE (Piqué, 2001), si bien algunos artículos de Miquel Nadal y de Miguel Ángel Moratinos publicados en la prensa ponían de manifiesto una perspectiva más innovadora. Un esfuerzo más colectivo después del 11 de septiembre para adelantar nuevas propuestas de política mediterránea se concretaron en un seminario Euro-Mediterráneo celebrado en Barcelona y organizado por el Institut Català de la Mediterrània, "Idees per impulsar el Procés de Barcelona", 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2001.

Referencias bibliográficas

Amnistía Internacional (2001) Informe de Política Exterior y Derechos Humanos del Gobierno español 2001: La balanza española: "suben los intereses económicos, bajan los Derechos Humanos" (www.a-i.es/esp/iape01.shtm)

Aznar, J.M.a (2001) Comparencia del presidente del Gobierno en el Congreso para explicar las prio-

ridades de la Presidencia Española de la UE, 10 de diciembre de 2001.

Aznar, J.M.a (2001) Respuestas del presidente del Gobierno en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, Congreso, 19 de diciembre de 2001.

Barbé, E. (1996) "Spain: The Uses of Foreign Policy Co-operation", en C. Hill (ed.), *The Actors in Europe's Foreign Policy*. Londres: Routledge.

Barbé, E. (2001a) "Spain and CFSP: The Emergence of a 'Major Player'?" en R. Gillespie y R. Youngs (eds.), *Spain: The European and International Challenges*. Londres: Frank Cass.

Barbé, E. (2001b) "La minicumbre de Londres sobre la guerra en Afganistán: ¿hacia los grupos restringidos en la UE en materia de gestión de crisis?", *IUEE Working Paper*, <http://www.uab.es/ieuu>.

Gillespie, R. (2000) *Spain and the Mediterranean: Developing a European Policy towards the South*. Londres: Macmillan.

Gillespie, R. (2001) *Spain and the Western Mediterranean*, Economic and Social Research Council, 'One Europe or Several?' research programme, working paper 37/01, University of Sussex.

Gold, P. (1994) *A Stone in Spain's Shoe: The Search for a Solution to the Problem of Gibraltar*. Liverpool: Liverpool University Press.

Grasa, R. (2001) "La política exterior española hacia América Latina: tendencias recientes y proyección hacia el futuro", *Afers Internacionals*, 54.

Oficina de Información Diplomática (2001) Constitución 'Casa Asia', 8 de noviembre.

Piqué, J. (2001) "El Mediterráneo: el gran desafío para la presidencia española de la UE". Entrevista a Josep Piqué, ministro español de Asuntos Exteriores. *Diálogo Mediterráneo*, 21.

Sahagún, F. (2001) "Spain and the United States: Military Primacy", en R. Gillespie y R. Youngs (eds.), *Spain: The European and International Challenges*. Londres: Frank Cass.

Sánchez Mateos, E. (2001) "Camino viejo y sendero nuevo: ¿España, hacia una política exterior global?", *Anuario Internacional CIDOB 2000*. Barcelona: Fundació CIDOB.